

Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia apelada.

**Y se tiene, además, presente:**

**Primero:** Que la controversia de autos tiene su origen en la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL) en contra de la Universidad de los Andes, por supuestas infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual.

La demandante, Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL en adelante) en su calidad de entidad de gestión colectiva de derechos de autor, sostiene que la Universidad de los Andes ha vulnerado sistemáticamente los derechos de propiedad intelectual de autores y editoriales que representa, al permitir la reproducción, almacenamiento y comunicación de obras literarias a través de la plataforma educativa denominada CANVAS, sin contar con las autorizaciones correspondientes. Como antecedente de su demanda, la actora realizó una medida prejudicial de exhibición que, según alega, evidencia la existencia de numerosas obras protegidas en dicha plataforma. En virtud de lo anterior, solicita que se declare la infracción, se ordene su cese, se condene a la Universidad demandada al pago de una indemnización calculada según las tarifas de SADEL por alumno matriculado, se ordene la publicación de la sentencia y se imponga una multa.

**Segundo:** Que, por su parte, la demandada Universidad de los Andes estructura su defensa en torno a varios ejes fundamentales. En primer lugar, cuestiona la legitimación activa de SADEL para demandar por sí misma y no en representación de los supuestos afectados. En segundo término, niega haber cometido infracción alguna a los derechos de autor, y explica que CANVAS es una plataforma de gestión del aprendizaje donde profesores y alumnos pueden compartir materiales en espacios de acceso restringido, sin que la Universidad tenga el control editorial sobre dicho contenido. Sostiene, además, que ha implementado múltiples medidas preventivas, incluyendo reglamentos, instructivos y advertencias periódicas a los usuarios sobre el respeto a la propiedad intelectual. Argumenta que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MZGCXRMSJEL

cualquier eventual infracción sería responsabilidad individual de los usuarios y no de la Institución. Finalmente califica la pretensión indemnizatoria de SADEL de desproporcionada, cuestionando la aplicación automática de las tarifas de SADEL como parámetro para calcular supuestos perjuicios en sede extracontractual.

**Tercero:** Que, la sentencia de primera instancia, si bien reconoció la legitimación activa de la actora como entidad de gestión colectiva, sin embargo, estimó que no se había acreditado la existencia de infracciones imputables a la Universidad demandada. Para llegar a esta conclusión, el tribunal consideró especialmente que los archivos encontrados en la plataforma CANVAS estaban en carpetas de acceso restringido, fueron subidos por usuarios individuales y que la Universidad de los Andes cuenta con un reglamento que responsabiliza a dichos usuarios por eventuales infracciones. Además, consideró que las tarifas que SADEL pretende aplicar corresponde al ámbito contractual y no resultan procedentes en sede de responsabilidad extracontractual.

**Cuarto:** Que, en contra dicha sentencia, la demandante interpuso recurso de apelación, cuestionando los fundamentos esenciales el fallo. En efecto, el recurso se estructura en torno a cinco agravios principales. En primer lugar, alega un error sustancial en la determinación de los hechos, determinadamente, en cuanto al alcance de la medida prejudicial, argumentando que el tribunal confundió el universo total de archivos disponibles (800.000) con los efectivamente revisados (844), entre los cuales se encontraron no solo fragmentos sino obras completas, lo que alteraría significativamente el análisis de la magnitud de las infracciones. En segundo término, sostiene que existe una errónea interpretación de la Ley de Propiedad Intelectual, tanto respecto a la falta de autorizaciones como al incumplimiento de las excepciones legales. Como tercer aspecto, cuestiona la aplicación de las normas sobre responsabilidad por el hecho de los dependientes, argumentando que la Universidad debe responder por las infracciones cometidas por sus profesores y alumnos, especialmente, considerando que éstas se realizan en el contexto de la prestación de servicios educacionales. El cuarto agravio que indica la actora, se refiere a



la supuesta infracción al debido proceso y errónea valoración de la prueba, particularmente en lo relativo a las tachas de testigos y la falta de consideración de informes relevantes. Finalmente, cuestiona la procedencia de la condena en costas.

Para fundamentar su recurso de apelación, la apelante acompañó en segunda instancia abundante prueba documental, incluyendo nuevos estudios sobre el uso de las obras protegidas en la Universidad, informes en derecho y evidencia de comunicaciones previas entre las partes.

**Quinto:** Que, por consiguiente, por este último aspecto, en cuanto a la prueba instrumental acompañada en segunda instancia por la actora, para comprobar si con ella es posible concluir que han sido acreditados en el proceso hechos que configuran efectivamente infracciones a la Ley de Propiedad Intelectual imputables a la Universidad de los Andes y, en tal caso, si procede la indemnización solicitada, según las tarifas que proporciona la propia demandante SADEL, es necesario señalar que, conforme a los principios que informan nuestro sistema procesal civil, particularmente, los de aportación de parte e impulso procesal de la prueba, si bien desde el punto de vista procesal siempre es admisible en segunda instancia la prueba instrumental y la confesión, sin embargo, el tribunal de segunda instancia no podrá ejercer tal facultad, si se trata de repetir la demostración de hechos ya probados o bien, de hechos que pudieron probarse en primera instancia y no lo fueron - como en el caso de esta sentencia -, según se desprende del inciso primero, del artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: “Los instrumentos podrá presentarse en cualquier estado del juicio hasta el vencimiento del término probatorio en primera instancia, y hasta la vista de la causa en segunda instancia.” En relación con el inciso primero, del artículo 207 del mismo Código, que indica: “En segunda instancia, salvo lo dispuesto en el inciso final del artículo 310 y en los artículos 348 y 385, no se admitirá prueba alguna.”

Además, en relación con la instrumental en análisis esta consiste en una gran cantidad de documentos los que conforman múltiples archivos, informes y estudios de terceros, correspondiéndole a la parte que la aporta la obligación de sistematizarla, explicar en cada



caso su contenido y relevancia y vincularla determinadamente con los hechos que pretende acreditar.

En efecto, si bien incumbe a los Tribunales el deber de valorizar la significación probatoria de los instrumentos acompañados por las partes a título de prueba, este deber es correlativo del que corresponde a los litigantes de expresar concreta y nominativamente la finalidad probatoria perseguida para acompañarlos en cada caso, tal como sucede con los demás medios probatorios. Sólo así puede dejarse a la contraria en situación de aceptarlos u objetarlos y permitir al sentenciador la evaluación de esas probanzas (sentencia Corte Suprema, 2 de octubre de 1942. Revista de Derecho y Jurisprudencia, tomo 40, sección primera, página 521).

**Sexto:** Que, entonces, no es bastante la mera presentación masiva de documentos esperando que sea el tribunal quien deba realizar la labor de análisis, sistematización y vinculación de éstos con los hechos de la causa, pues ello excede las tareas jurisdiccionales y atenta en contra el principio de igualdad de armas para las partes en el proceso.

En efecto, cada vez que se acompañan grandes volúmenes de prueba instrumental, constituye una carga ineludible para la parte incorporarla debidamente singularizada, pues, como ha dicho la jurisprudencia, antes citada, si bien incumbe a los tribunales el deber de valorizar la significación probatoria de los instrumentos acompañados por las partes a título de prueba, es deber correlativo que corresponde a las partes expresar la finalidad probatoria, con el objeto de permitir al sentenciador ponderarla y saber concretamente cuáles son los elementos de confirmación procesal que tiene por objeto acreditar su pretensión, pues no son tareas del juez realizar un inventario previo de la prueba acompañada por las partes, por cuanto dicho examen importaría la realización de una actividad de parte, que le pertenece exclusivamente a quien quiera valerse de dichos documentos.

**Séptimo:** Que, así, el cuestionamiento formulado por la parte demandante respecto de la falta de análisis del total de archivos disponibles (800.000) resulta contradictorio con su propia conducta procesal, pues si bien alega que el universo total de archivos podría



contener un número significativamente mayor de infracciones, no realizó durante el procedimiento la necesaria labor de sistematización y especificación que permitiera al tribunal examinar más allá de los archivos efectivamente revisados durante la medida prejudicial.

No puede pretenderse, como se ha dicho, que sea el tribunal quien deba revisar la totalidad de los archivos disponibles en la plataforma CANVAS para detectar posibles infracciones, pues ello corresponde a una actividad probatoria que es carga de la parte que alega tales vulneraciones.

**Octavo:** Que, adicionalmente, cabe razonar que la característica sustancial de los instrumentos propuestos masivamente, es que éstos son documentos privados, los que, en consecuencia, no constan con la garantía de la fe pública, y, por consiguiente, es necesario su reconocimiento expreso, tácito o judicial para que tengan valor probatorio en juicio, esto es, lo tendrán si han sido reconocidos dentro de éste, y como esto no ha sucedido carecen de todo mérito, incluso como base de presunción judicial.

Y, vistos, además, lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

Que **se confirma** la sentencia definitiva apelada dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada en los autos Rol N° C-8784-2020, seguido ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, correspondiente al ingreso Corte N° 1277-2023.

Asimismo, **se confirma** la resolución apelada de diecisiete de enero de dos mil veintidós, dictada en los autos Rol N° C-8784-2020, seguido ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, correspondiente al ingreso Corte N° 1290-2022.

**Regístrese y devuélvase.**

Redacción del Ministro Jorge Zepeda Arancibia.

Rol Civil 1.290 – 2022 (Acum. 1277-2023)

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por el ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada, además, por el ministro señor Alejandro Rivera Muñoz y la abogada integrante señora Magaly Correa Farías.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MZGCXRMSJEL



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MZGCXRMSJEL

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jorge Luis Zepeda A., Alejandro Rivera M. y Abogada Integrante Magaly Carolina Correa F. Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a tres de diciembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: MZGCXRMSJEL